

No. 55734*

—
**Peru
and
Bolivia (Plurinational State of)**

Bilateral Agreement between the Government of the Republic of Peru and the Government of the Plurinational State of Bolivia to strengthen the fight against trafficking in persons, migrant smuggling and related crimes. Puno, 23 June 2015

Entry into force: *9 July 2018 by notification, in accordance with article X*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Peru, 18 March 2019*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

—
**Pérou
et
Bolivie (État plurinational de)**

Accord bilatéral entre le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie visant à renforcer la lutte contre la traite de personnes, le trafic de migrants et les délits connexes. Puno, 23 juin 2015

Entrée en vigueur : *9 juillet 2018 par notification, conformément à l'article X*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pérou, 18 mars 2019*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS

La República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante "Las Partes".

Deseosas de fortalecer sus relaciones de amistad y de ampliar la cooperación entre ambas Partes.

TENIENDO EN CUENTA que, la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita el 15 de noviembre del 2000, y de su Protocolo para Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños complementario de la misma, igualmente suscrito el 15 de noviembre del 2000;

CONSCIENTES, de la obligación de garantizar la defensa de los derechos humanos, el respeto de la dignidad humana y las obligaciones jurídicas dimanantes de los marcos constitucionales y legales, como también las plasmadas en las declaraciones e instrumentos jurídicos internacionales vinculantes para ambas Partes, en particular:

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969.
2. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.
3. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, adoptada en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP V), suscrita el 18 de marzo de 1994.
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem Do Para", suscrita el 09 de junio de 1994.
5. Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, adoptada en Ginebra en la 87ª. Reunión CIT, del 17 de junio de 1999.
6. Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000.
7. Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, suscrita el 15 de noviembre de 2000.
8. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños, suscrito el 15 de noviembre de 2000.
9. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito el 15 de noviembre de 2000.

CONVENCIDOS, de que la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos atentan contra los derechos humanos y constituyen amenazas para el

desarrollo económico social de ambas Partes, requiriendo para su combate frontal una respuesta concertada a través de la coordinación de acciones a nivel interinstitucional e internacional;

CONSIDERANDO, la profunda preocupación sobre la trata personas, el tráfico ilícito de migrantes, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, como una grave violación de los derechos humanos y los delitos conexos que amenazan los derechos fundamentales de la persona individual y afectan la seguridad ciudadana y el bienestar de las sociedades de ambas Partes;

DADAS, las características propias de la delincuencia organizada transnacional se reconoce, también la verificación de delitos conexos, a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes;

EN RAZÓN, a la situación y condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de estas actividades delictivas dentro de contextos comunes, se requiere un abordaje articulado por ambas Partes en los ejes de prevención, protección integral a las víctimas y persecución de los agentes criminales del delito de trata personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos;

RECONOCIENDO, la importancia de fortalecer la coordinación y cooperación internacional frente a los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos que permita el desarrollo de capacidades, mecanismos, normativa, intercambio de información y gestión del conocimiento, para la prevención, persecución de los actores del delito, así como para la atención y recuperación de las víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes en razón del principio de su interés superior;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

Artículo I

Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto generar acciones de cooperación y coordinación entre las Partes, para combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos, a través de mecanismos de prevención, persecución, protección, asistencia y reintegración de las víctimas.

Artículo II

Definiciones

1. Para los fines del presente Acuerdo se adoptarán las definiciones establecidas en el Artículo 2° de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y en el Artículo 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas y el Tráfico de migrantes, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

2. Se entenderá por "víctima de trata" a toda persona sobre la que existan indicios razonables de que haya sido o esté sometida a algún tipo de explotación prevista en el artículo 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes especialmente Mujeres y Niños, aun cuando ésta no se haya consumado y con independencia de la existencia de denuncia por parte de la presunta víctima.
3. Para los fines del presente Acuerdo, se adoptan los criterios para determinación de la jurisdicción, extradición y asistencia judicial recíproca, previstos en los artículos 15°, 16° y 18°, respectivamente, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Artículo III

Ámbito de Cooperación

Las autoridades de las Partes coordinarán a través de las entidades concernidas con el objeto del Acuerdo, compromisos y resultados en los siguientes campos:

1. **Prevención contra el delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos:**
 1. Formular políticas, programas y acciones bilaterales con miras a prevenir la trata, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos.
 2. Realizar acciones de prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos principalmente en las zonas fronterizas en coordinación y cooperación con entidades estatales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, gremios profesionales y empresariales, sector privado y otros integrantes de la sociedad civil, así como establecer acciones conjuntas para desalentar la oferta y la demanda de personas con fines de explotación, con el objeto de hacer más eficaz la prevención de este delito.
 3. Realizar programas conjuntos de capacitación, sensibilización y fortalecimiento institucional en la temática de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos conexos, tales como:
 - a) Intercambio de experiencias de aprendizaje, casuística incluyendo reuniones de trabajo, pasantías, conferencias, seminarios y talleres de profesionales especializados en el ámbito penal, derecho internacional privado, familia, procesal internacional, constitucional y policial; dirigidas a jueces, fiscales y efectivos policiales encargados de la labor de investigación, así como de profesionales que brindan servicios de atención especializados y que participan en el diseño, implementación y supervisión de las políticas públicas vinculadas con el objeto del presente Acuerdo.
 - b) Desarrollar actividades y módulos de capacitación y sensibilización para los funcionarios públicos civiles, castrenses y policiales que trabajan en zonas

fronterizas, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de capacidades orientadas a la prevención, detección, identificación, reporte, protección y asistencia de víctimas de hechos delictivos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

4. Desarrollar programas conjuntos de sensibilización en el sector de Educación de las Partes.
 5. Desarrollar programas conjuntos de sensibilización en los sectores académicos, escolares, empresariales, gremiales, en la agricultura, la minería, la construcción, el comercio, el servicio doméstico, la hotelería, el turismo y la industria de ambas Partes, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
 6. Dirigir acciones de monitoreo de los logros, medición de resultados y retroalimentación de las medidas de prevención contra el delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
- II. Persecución y sanción penal del delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos :**
1. Apoyo a la ejecución de operaciones conjuntas entre entidades homólogas para la ubicación geográfica de rutas clandestinas por donde se trasladen a las posibles víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos en zonas fronterizas, implementando mecanismos de monitoreo, vigilancia, interdicción y atención inmediata y primaria de las víctimas.
 2. Apoyo a las investigaciones de los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos que permitan la identificación de personas y organizaciones criminales que actúen en el territorio de cada Parte.
 3. Cooperación y asistencia mutua en la elaboración y ejecución de procedimientos para la investigación de casos binacionales de delito de trata de personas, el tráfico de ilícito de migrantes y los delitos conexos.
 4. Comunicación entre funcionarios de las Cancillerías, representaciones Consulares, Representantes del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, Migraciones, Ministerios de Salud, de la Mujer, de Justicia y Unidades de la Policía Especializada de ambas Partes e instituciones que trabajan en la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, a efectos de habilitar canales seguros y flujos constantes de comunicaciones entre dichas autoridades, para la persecución y sanción penal del delito.
 5. Análisis y gestión del conocimiento resultado de la investigación del delito de trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos respecto a autores, colaboradores, *modus operandi*, rutas, métodos de investigación que

permita combatir eficazmente las redes de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, respetando la normativa vigente.

6. Cooperación entre entidades de las Partes, para la ejecución de las órdenes de detención y capturas nacionales e internacionales que, por el delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, emitan las respectivas autoridades del sistema penal.
7. Persecución transfronteriza de redes criminales, autor(es) del delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, por fuerzas combinadas de las Partes, respetando la jurisdicción de la Parte donde se realicen, conllevando en caso de verificar alguna detención, la obligación de poner a disposición, de las autoridades competentes, a la persona en cuyo territorio se haya producido la detención.
8. Ejecución expedita de incautaciones; medidas cautelares o de garantía respecto a los activos o bienes; trámite de exhortos; cartas rogatorias; resoluciones judiciales, dimanantes de los procesos relacionados con la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos.
9. Promover encuentros de evaluación de logros, medición de resultados y retroalimentación de medidas de persecución y sanción penal de delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

III. Asistencia, protección, recuperación y reintegración de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos:

1. Lo(a)s funcionario(a)s, profesionales y demás actores vinculados directa e indirectamente con las actuaciones investigativas y/o judiciales relativas a los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, protegerán la privacidad e identidad de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
2. Cada Parte velará porque su ordenamiento jurídico y/o administrativo interno prevea medidas y protocolos de derivación y de asistencia integral y protección a las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
3. Cada Parte aplicará medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, incluso, cuando proceda, a través de la cooperación internacional, y la ayuda de organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.
4. Las Partes elaborarán un registro/catastro sobre redes de recursos y medios validados para intervenir en la protección de víctimas y testigos en la zona fronteriza de las Partes.

5. En el caso de víctimas de terceros países, cada Parte posibilitará el tránsito custodiado de las víctimas hasta el último país legal de admisión, sin que esta acción posibilite, necesariamente a la víctima, la condición de admisión en el país de tránsito. En el caso de las víctimas de trata de personas, el tránsito custodiado de las mismas, se adoptará con arreglo al principio internacional de no devolución y a la prohibición de tratamiento inhumano o degradante con arreglo a las normas internacionales de los derechos humanos.
6. Cada Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, en particular, las necesidades especiales de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
7. Cada Parte brindará orientación jurídica y patrocinio legal gratuito para que las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos que voluntariamente lo soliciten, tengan la posibilidad de accionar para la reparación integral del daño inmediato y mediato a su proyecto de vida contra los sujetos activos del delito y sus cómplices.
8. Cada Parte de acuerdo al caso concreto, diligenciará comunicaciones formales y llevará a cabo coordinaciones expeditas para la salida del país, del nacional o residente en el territorio de la otra Parte, que manifieste libremente ésta voluntad.

Artículo IV

Repatriación de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos

Las partes elaborarán conjuntamente un Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

Artículo V

Medidas Fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, las Partes reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos.
2. Cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos internacionales aplicables se preverá, a través de sistemas de gestión de información anticipada de pasajeros, entre otras medidas, la obligación de los transportistas, las empresas de transporte, y propietarios de vehículos de cerciorarse que todos los pasajeros que desplacen tengan en su poder los documentos de viaje

requeridos para ingresar, de forma regular, en el Estado receptor, y, tratándose de menores de edad, la autorización legal para viaje de menor de edad, de sus padres o representantes legales.

3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas en el numeral 1° y 2° del presente artículo.
4. Cada Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, prohibir el ingreso o generar la salida obligatoria de personas implicadas en la comisión de delitos relativos a trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

Artículo VI

Intercambio de Información Estadística

Las Partes se comprometen a intercambiar en forma estandarizada y de manera anual, información sobre los casos registrados en las instituciones que desarrollan acciones de persecución, ejecución de operativos, prevención, asistencia y protección a víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, con la finalidad de contar con información homogénea entre las partes.

Artículo VII

Mecanismos de Seguridad

Las Partes garantizarán los mecanismos de seguridad adecuados para el control de autorizaciones de viaje de menores, documentos de identidad o de viaje a fin que estos no sean susceptibles de falsificación o adulteración.

Artículo VIII

Coordinación y Aplicación

Las entidades responsables de la coordinación y ejecución de las acciones descritas en el marco del presente Acuerdo son:

- Por la República del Perú, las entidades integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (GTMPTP).
- Por el Estado Plurinacional de Bolivia, las entidades integrantes del Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de personas.
- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo Bilateral y en el plazo de 90 días, las Partes elaborarán un Plan de Trabajo con la finalidad de planificar las actividades que corresponda a su ejecución, las coordinaciones estarán a cargo de las Secretarías Técnicas del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (GTMPTP) del Perú y del Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de personas de Bolivia.

Artículo IX

Solución de Controversias

Toda controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se someterá a arreglo amistoso por vía diplomática, mediante negociaciones o consultas directas entre las Partes.

Artículo X

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la recepción de la última notificación, en que una de las Partes comunique a la otra, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos requeridos para tal fin conforme a sus ordenamientos jurídicos internos.

Tendrá una duración de cinco (05) años, a partir de su entrada en vigencia y se renovará automáticamente por períodos consecutivos iguales.

Artículo XI

Enmiendas

El presente Acuerdo podrá modificarse mediante la suscripción de enmiendas convenidas por las Partes.

Artículo XII

Denuncia

El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, a través de una notificación por la vía diplomática, mediante la cual se exprese la voluntad de terminarlo. La denuncia surtirá efectos seis (06) meses después de la fecha de la recepción de dicha notificación por la otra Parte.

La terminación del Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas y proyectos acordados y en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Puno, República del Perú, a los veintitrés días del mes de junio de 2015 en dos ejemplares, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República del Perú

Por el Estado Plurinacional de Bolivia



ANA MARÍA SÁNCHEZ VARGAS DE RÍOS

Ministra de Relaciones Exteriores



DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES

Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION – TRADUCTION]

BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PERU AND THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA TO STRENGTHEN THE FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, THE SMUGGLING OF MIGRANTS AND RELATED CRIMES

The Republic of Peru and the Plurinational State of Bolivia, hereinafter “the Parties”,

Desirous of strengthening their friendly relations and expanding cooperation between the two Parties,

Bearing in mind that the Republic of Peru and the Plurinational State of Bolivia are parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, signed on 15 November 2000, and its supplementary Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, also signed on 15 November 2000,

Aware of the obligation to guarantee the protection of human rights, respect for human dignity and the legal obligations arising from constitutional and legal frameworks, as well as those enshrined in international declarations and legal instruments which are binding on both Parties, in particular:

1. The American Convention on Human Rights, signed at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights on 22 November 1969,

2. The Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989,

3. The Inter-American Convention on International Traffic in Minors, adopted at the fifth Inter-American Specialized Conference on Private International Law (CIDIP-V), signed on 18 March 1994,

4. The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará), signed on 9 June 1994,

5. The Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, adopted in Geneva at the 87th ILO Meeting, on 17 June 1999,

6. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, adopted by the United Nations General Assembly on 25 May 2000,

7. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, signed on 15 November 2000,

8. The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, signed on 15 November 2000,

9. The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, signed on 15 November 2000.

Convinced that trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes violate human rights and constitute threats to the economic and social development of both Parties, necessitating a concerted response to combat them frontally through the coordination of actions at the inter-agency and international levels,

Considering the deep concern about trafficking in persons and the smuggling of migrants, especially women, children and adolescents, as a grave violation of human rights, and about related crimes that threaten the fundamental rights of the individual and impact public security and the well-being of the societies of both Parties,

Given the recognition of the specific characteristics of transnational organized crime, as well as verification of crimes related to trafficking in persons and the smuggling of migrants,

Given that, in view of the situation and vulnerable conditions of the victims of these criminal activities under common circumstances, an approach developed by both Parties is required in the areas of prevention, the comprehensive protection of victims and the prosecution of perpetrators of the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes,

Recognizing the importance of strengthening international coordination and cooperation with regard to the crimes of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes to enable the development of capacities, mechanisms and standards, the exchange of information and knowledge management for the prevention and prosecution of perpetrators of the crime, as well as for the care and recovery of the victims, especially women, children and adolescents, in accordance with the principle of their best interests,

Have agreed as follows:

Article I. Purpose

The purpose of this Agreement is to promote action for cooperation and coordination between the Parties to combat trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, through mechanisms of prevention, prosecution, protection, assistance and reintegration of victims.

Article II. Definitions

1. For the purposes of this Agreement, the definitions established in article 2 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, are hereby adopted.

2. “Victim of trafficking” means any person with respect to whom there are reasonable indications that he or she has been or is being subjected to some form of exploitation referred to in article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, even if such action has not been accomplished and regardless of whether the presumed victim has made a complaint.

3. For the purposes of this Agreement, the criteria for the determination of jurisdiction, extradition and mutual legal assistance provided for in articles 15, 16 and 18, respectively, of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, are hereby adopted.

Article III. Scope of application

The authorities of the Parties shall coordinate, through the entities concerned with the subject matter of this Agreement, commitments and outcomes in the following areas:

I. Prevention of the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes:

1. Formulating bilateral policies, programmes and actions with a view to preventing trafficking, the smuggling of migrants and related crimes.

2. Carrying out actions to prevent trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, mainly in the border areas, in coordination and cooperation with State entities, international agencies, non-governmental organizations, professional and business associations, the private sector and other members of civil society, and also undertaking joint action to discourage the supply of and demand for persons for purposes of exploitation, with a view to more effective prevention of this crime.

3. Carrying out joint training, awareness-raising and institution-building programmes on the issue of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, such as:

(a) Exchange of learning experiences and case studies, including working meetings, internships, conferences, seminars and workshops of experts in the fields of criminal, private international, family, international procedural, constitutional and police law intended for judges, prosecutors and police personnel responsible for investigative work, as well as professionals who provide specialized care and who participate in the design, implementation and monitoring of public policies related to the purpose of this Agreement.

(b) Development of training and awareness-raising activities and modules for civilian, military and police officials working in border areas, in order to contribute to capacity-building with a view to prevention, detection, identification, reporting, protection of and assistance to victims of criminal acts of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

4. Developing joint awareness-raising programmes in the education sector of the Parties.

5. Developing joint awareness-raising programmes in the academic, school, business and trade union sectors, and in agriculture, mining, construction, trade, domestic service, hotel-keeping, tourism and industry in both Parties, in order to discourage the demand that gives rise to any form of exploitation leading to trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, especially of women, children and adolescents.

6. Directing activities to monitor achievements, measure outcomes and provide feedback on preventive measures against the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

II. Prosecution and punishment of the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes:

1. Support for the conduct of joint operations between counterpart entities for the geographical detection of clandestine routes along which potential victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes are transferred in border areas, while implementing measures for monitoring, surveillance, interdiction and immediate and primary care for victims.

2. Support for investigations of crimes of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes that enable the identification of persons and criminal organizations operating in the territory of each Party.

3. Cooperation and mutual assistance in the development and implementation of procedures for the investigation of binational cases of the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

4. Communication between officials of the Ministries of Foreign Affairs, consular offices, representatives of the Public Prosecutor's Office, the Ministry of the Interior, the Ministry of Government, Migration, the Ministries of Health, Women's Affairs, Justice and specialized police units of both Parties and agencies working to combat trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, in order to establish secure channels and ensure a constant flow of communication between those authorities for the prosecution and punishment of the crime.

5. Analysis and management of information resulting from investigations of the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes regarding perpetrators, collaborators, modus operandi, routes, and methods of investigation that make it possible to effectively combat networks of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, while respecting the regulations in force.

6. Cooperation between entities of the Parties in executing national and international arrest warrants and detention orders for the crime of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes which are issued by the respective authorities of the criminal justice system.

7. Cross-border prosecution of criminal networks engaged in trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes by combined forces of the Parties, respecting the jurisdiction of the Party concerned, and entailing, in the event of an arrest, the obligation to make arrested persons available to the competent authorities in the territory of which the arrest was made.

8. Expeditious execution of seizures; precautionary or protective measures in respect of assets or property; processing of letters rogatory; letters of request; judicial decisions arising from proceedings concerned with trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

9. Promotion of meetings to evaluate achievements, measure results and provide feedback on measures to prosecute and punish crimes of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

III. Assistance, protection, recovery and reintegration of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes:

1. Officials, professionals and other actors directly and indirectly involved in investigative and/or judicial actions related to the crimes of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

2. Each Party shall ensure that its domestic legal and/or administrative system provides for measures and protocols for referral and comprehensive assistance to and protection of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

3. Each Party shall implement measures to foster the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, including, where appropriate, through international cooperation and assistance from non-governmental organizations and other sectors of civil society.

4. The Parties shall develop a register of resource networks and validated means to assist in the protection of victims and witnesses in the border area of the Parties.

5. In the case of victims from third countries, each Party shall enable the safe transit of victims to the last legal country of admission, without this action necessarily giving the victim the status of admission to the country of transit. In the case of victims of trafficking in persons, the safe transit of such persons shall be ensured in accordance with the international principle of non-

refoulement and the prohibition of inhuman or degrading treatment in accordance with international human rights norms.

6. Each Party shall take into account, in implementing the provisions of this Agreement, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes, in particular the special needs of women, children, adolescents and persons in vulnerable situations.

7. Each Party shall provide legal guidance and free legal representation so that victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes who voluntarily request it, have the possibility of taking legal action against the perpetrators of the crime and their accomplices for full reparation of the immediate and indirect damage to their livelihoods.

8. Each Party shall, on a case-by-case basis, facilitate formal communications and carry out expeditious and coordinated action for the departure from the country of nationals or residents of the other Party who freely express such wish.

Article IV. Repatriation of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes

The Parties shall jointly develop a protocol for the repatriation of victims of trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes within a period of not more than 180 days following the entry into force of this Agreement.

Article V. Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of persons, the Parties shall, to the extent possible, strengthen such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

2. Where appropriate, and without prejudice to the applicable international instruments, provision shall be made, through advance passenger information management systems, for, inter alia, the obligation of carriers, transport companies and vehicle owners to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for normal entry into the receiving State and, in the case of minors, the legal authorization of their parents or legal guardians to travel as minors.

3. Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for penalties in the event of non-compliance with the obligations set forth in paragraphs 1 and 2 of this article.

4. Each Party shall consider the possibility of adopting measures that, in accordance with its domestic law, provide for prohibition of entry or obligatory departure of persons implicated in committing crimes involving trafficking in persons, the smuggling of migrants and related crimes.

Article VI. Exchange of statistical information

The Parties undertake to exchange, in a standardized form and on an annual basis, information on the cases registered in the bodies responsible for prosecution, conduct of operations, prevention, assistance and protection of victims of trafficking in persons, the smuggling of

migrants and related crimes, in order to have access to compatible information between the Parties.

Article VII. Security mechanisms

The Parties shall ensure adequate security mechanisms for the control of travel authorizations for minors, identity documents and travel documents so that they are not susceptible to forgery or falsification.

Article VIII. Coordination and implementation

The entities responsible for the coordination and implementation of the actions described within the framework of this Agreement are:

- For the Republic of Peru, the members of the Multisectoral standing working group against trafficking in persons (GTMPTP).

- For the Plurinational State of Bolivia, the members of the Plurinational council against trafficking in and the smuggling of persons.

- Following the entry into force of this Bilateral Agreement and within a period of 90 days, the Parties shall draw up a work plan in order to plan the activities required for its implementation, which shall be coordinated by the technical secretariats of the Multisectoral standing working group against trafficking in persons (GTMPTP) of Peru and the Plurinational council against trafficking in and the smuggling of persons of Bolivia.

Article IX. Settlement of disputes

Any dispute arising in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through the diplomatic channel, by means of direct negotiations or consultations between the Parties.

Article X. Entry into force

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the final notification whereby the Parties communicate to each other through the diplomatic channel that the procedures required for that purpose under their domestic legal systems have been fulfilled.

It shall remain in force for five years as of the date of its entry into force and shall be automatically renewed for consecutive periods of equal duration.

Article XI. Amendments

This Agreement may be amended by the signing of amendments agreed on by the Parties.

Article XII. Denunciation

The Agreement may be denounced by either Party by means of a notification through the diplomatic channel indicating its desire to terminate it. Denunciation shall take effect six months after the date of receipt of such notification by the other Party.

Termination of this Agreement shall not affect the implementation of programmes and projects agreed on by the Parties, unless otherwise agreed by the Parties.

SIGNED in the city of Puno, Republic of Peru, on 23 June 2015, in two copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Peru:
ANA MARÍA SÁNCHEZ VARGAS DE RÍOS
Minister for Foreign Affairs

For the Plurinational State of Bolivia:
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD BILATÉRAL ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DE PERSONNES, LE TRAFIC DE MIGRANTS ET LES DÉLITS CONNEXES

La République du Pérou et l'État plurinational de Bolivie, ci-après dénommés les « Parties », Désireux de renforcer les relations amicales et d'améliorer la coopération entre les deux Parties ;

Étant entendu que la République du Pérou et l'État plurinational de Bolivie sont parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 15 novembre 2000, ainsi qu'au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, également signé le 15 novembre 2000 ;

Conscients de l'obligation de garantir la protection des droits de l'homme et le respect de la dignité humaine, des obligations légales découlant des cadres constitutionnels et juridiques, ainsi que celles inscrites dans les déclarations et instruments juridiques internationaux qui lient les deux Parties, notamment :

1. La Convention américaine relative aux droits de l'homme, signée lors de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l'homme le 22 novembre 1969,

2. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies,

3. La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, adoptée lors de la cinquième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP-V), signée le 18 mars 1994,

4. La Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), signée le 9 juin 1994,

5. La Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève lors de la 87^e réunion de l'Organisation internationale du Travail, le 17 juin 1999,

6. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000,

7. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 15 novembre 2000,

8. Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000,

9. Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé le 15 novembre 2000.

Convaincus que la traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes portent atteinte aux droits de l'homme et constituent une menace pour le développement économique et social des deux Parties, ce qui nécessite une réponse concertée pour les combattre de front par la coordination des actions aux niveaux interinstitutionnel et international ;

Considérant la profonde préoccupation que suscitent la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier de femmes, d'enfants et d'adolescents, qui constituent une grave violation des droits de l'homme, ainsi que les délits connexes qui menacent les droits fondamentaux de la personne et qui ont une incidence sur la sécurité publique et le bien-être des sociétés des deux Parties ;

Compte tenu de la reconnaissance des caractéristiques spécifiques de la criminalité transnationale organisée, ainsi que du contrôle des délits liés à la traite des personnes et au trafic de migrants ;

Étant donné que, au vu de la situation et des conditions de vulnérabilité des victimes de ces activités criminelles dans des circonstances courantes, une approche développée par les deux Parties est nécessaire dans les domaines de la prévention, de la protection intégrale des victimes et de la poursuite des auteurs de crimes de traite de personnes, de trafic de migrants et de délits connexes ;

Reconnaissant l'importance du renforcement de la coordination internationale et de la coopération en ce qui concerne les crimes de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes, afin de permettre le développement de capacités, de mécanismes et de normes, l'échange d'informations et la gestion des connaissances pour la prévention et la poursuite des auteurs de ces crimes, ainsi que pour la prise en charge et le rétablissement des victimes, en particulier des femmes, des enfants et des adolescents, conformément au principe de leur intérêt supérieur ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Objet

Le présent Accord vise à promouvoir une action de coopération et de coordination entre les Parties afin de lutter contre la traite de personnes, le trafic illicite de migrants et les délits connexes, par le biais de mécanismes de prévention, de poursuites, de protection, d'assistance et de réinsertion des victimes.

Article II. Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les définitions établies dans l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que dans l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sont adoptées.

2. Le terme « victime de la traite » désigne toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices raisonnables qu'elle a été ou est soumise à une forme d'exploitation visée à l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et

des enfants, même si cette action n'a pas été accomplie et indépendamment du fait que la victime présumée ait porté plainte.

3. Aux fins du présent Accord, les critères de détermination de la juridiction, d'extradition et d'entraide judiciaire prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, sont adoptés.

Article III. Champ d'application

Les autorités des Parties coordonnent, par l'intermédiaire des entités concernées par l'objet du présent Accord, les engagements et les conclusions dans les domaines suivants :

I. La prévention du crime de traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes :

1. En établissant des politiques bilatérales, des programmes et des actions en vue de prévenir la traite de personnes, le trafic de migrants et les délits connexes.

2. En menant des actions visant à prévenir la traite de personnes, le trafic de migrants et les délits connexes, principalement dans les zones frontalières, en coordination et en coopération avec les entités étatiques, les agences internationales, les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles et commerciales, le secteur privé et d'autres membres de la société civile, ainsi qu'en entreprenant des actions conjointes visant à décourager l'offre et la demande de personnes à des fins d'exploitation, en vue d'une prévention plus efficace de ces délits.

3. En menant des programmes conjoints de formation, de sensibilisation et de renforcement des institutions sur les questions de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes, tels que :

a) L'échange d'expériences d'apprentissage et d'études de cas, y compris des réunions de travail, des stages, des conférences, des séminaires et des ateliers d'experts dans les domaines du droit pénal, du droit international privé, du droit de la famille, du droit procédural international, du droit constitutionnel et de la législation relative à la police, destinés aux juges, aux procureurs de la République et au personnel de police chargés des enquêtes, ainsi qu'aux professionnels qui fournissent une prise en charge spécialisée et qui participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques liées à l'objet du présent Accord.

b) Le développement d'activités et de modules de formation et de sensibilisation à l'intention des fonctionnaires civils, militaires et de police travaillant dans les zones frontalières, afin de contribuer au renforcement des capacités en vue de la prévention, de la détection, de l'identification, du signalement, de la protection et de l'assistance aux victimes d'actes criminels de traite des personnes, de trafic de migrants et de délits connexes.

4. En développant des programmes conjoints de sensibilisation dans le secteur de l'éducation de chacune des Parties.

5. En développant des programmes conjoints de sensibilisation dans les secteurs universitaire, scolaire, commercial et syndical, ainsi que dans les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la construction, du commerce, des services domestiques, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'industrie des deux Parties, afin de décourager la demande qui donne lieu à toute forme d'exploitation conduisant à la traite des personnes, au trafic de migrants et aux délits connexes, en particulier des femmes, des enfants et des adolescents.

6. En dirigeant des activités destinées à évaluer les réalisations, à mesurer les résultats et à fournir un retour d'information sur les mesures préventives contre le crime de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes.

II. La poursuite et la répression des crimes de traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes :

1. Le soutien à la conduite d'opérations conjointes entre entités homologues pour la détection géographique des itinéraires clandestins le long desquels les victimes potentielles de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes sont transférées dans les zones frontalières, tout en mettant en œuvre des mesures de suivi, de surveillance, d'interdiction et de prise en charge immédiate et directe des victimes.

2. Le soutien aux enquêtes sur les crimes de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes, qui permettent d'identifier les personnes et les organisations criminelles opérant sur le territoire de chaque Partie.

3. La coopération et l'assistance mutuelle dans l'élaboration et la mise en œuvre de procédures d'enquête sur les cas binationaux de crime de traite des personnes, de trafic de migrants et de délits connexes.

4. La communication entre les fonctionnaires des Ministères des affaires étrangères, les bureaux consulaires, les représentants du ministère public, le Ministère de l'intérieur, le Ministère de l'immigration, les Ministères de la santé, de la promotion de la femme, de la justice, ainsi que les unités de police spécialisées des deux Parties et les agences de lutte contre la traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes, afin d'établir des canaux sûrs et d'assurer un flux constant de communication entre ces autorités dans le cadre de la poursuite et de la répression de ces délits.

5. L'analyse et la gestion des informations résultant des enquêtes sur le crime de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes concernant les auteurs, les collaborateurs, les modus operandi, les itinéraires et les méthodes d'investigation permettant de lutter efficacement contre les réseaux de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes, dans le respect de la réglementation en vigueur.

6. La coopération entre les entités des Parties dans l'exécution des ordonnances de mise en détention provisoire et mandats d'arrêt nationaux et internationaux relatifs au crime de traite des personnes, au trafic de migrants et aux délits connexes, émis par les autorités respectives du système de justice pénale.

7. La poursuite transfrontalière des réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes par les forces combinées des Parties, dans le respect de la juridiction de la Partie concernée, et entraînant, en cas d'arrestation, l'obligation de mettre les personnes arrêtées à la disposition des autorités compétentes du territoire sur lequel l'arrestation a été effectuée.

8. L'exécution rapide des saisies ; les mesures de précaution ou de protection à l'égard des actifs ou des biens ; le traitement des commissions rogatoires ; les lettres rogatoires ; les décisions judiciaires découlant des procédures relatives à la traite des personnes, au trafic de migrants et aux délits connexes.

9. La promotion de réunions destinées à évaluer les réalisations, à mesurer les résultats ainsi qu'à fournir un retour d'information sur les mesures visant à poursuivre et sanctionner les crimes de traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes.

III. L'assistance, la protection, le rétablissement et la réinsertion des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes :

1. Les fonctionnaires, professionnels et autres acteurs participant directement ou indirectement aux enquêtes et/ou aux actions judiciaires liées aux crimes de traite des personnes, au trafic de migrants et aux délits connexes doivent protéger la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes.

2. Chaque Partie veille à ce que son système juridique et/ou administratif interne prévoie des mesures et des protocoles visant à fournir une orientation, une assistance complète et une protection aux victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes.

3. Chaque Partie applique des mesures destinées à favoriser le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes, y compris, le cas échéant, via la coopération internationale et l'assistance des organisations non gouvernementales et d'autres secteurs de la société civile.

4. Les Parties établissent un registre des réseaux de ressources et des moyens validés pour aider à la protection des victimes et des témoins dans la zone frontalière des Parties.

5. Dans le cas de victimes provenant de pays tiers, chaque Partie permet le transit en toute sécurité des victimes vers le dernier pays légal d'admission, sans que cette action confère nécessairement à la victime le statut d'admission dans le pays de transit. Dans le cas des victimes de la traite des personnes, le transit en toute sécurité de ces personnes est assuré conformément au principe international de non-refoulement et à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme.

6. Chaque Partie tient compte, dans le cadre de l'application des dispositions du présent Accord, de l'âge, du sexe et des besoins particuliers des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes, en particulier des besoins particuliers des femmes, des enfants, des adolescents et des personnes en situation vulnérable.

7. Chaque Partie fournit une assistance juridique et une représentation juridique gratuite afin que les victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes qui en font volontairement la demande aient la possibilité d'engager une action en justice contre les auteurs du délit et leurs complices, en vue d'obtenir la réparation intégrale du préjudice immédiat et indirect causé à leurs moyens de subsistance.

8. Chaque Partie facilite, au cas par cas, les communications officielles et mène une action rapide et coordonnée pour le départ du pays des ressortissants ou résidents de l'autre Partie qui en expriment librement le souhait.

Article IV. Rapatriement des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes

Les Parties élaborent conjointement un protocole pour le rapatriement des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article V. Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières

nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes, le trafic de migrants et les délits connexes.

2. Le cas échéant, et sans préjudice des instruments internationaux applicables, des dispositions sont prises, par le biais de systèmes de gestion des renseignements préalables concernant les voyageurs, pour que les transporteurs, les entreprises de transport et les propriétaires de véhicules soient tenus, entre autres, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée normale dans l'État d'accueil et, dans le cas des mineurs, de l'autorisation légale de leurs parents ou de leur tuteur légal de voyager en tant que mineurs.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Chaque Partie envisage la possibilité d'adopter des mesures qui, conformément à son droit interne, prévoient l'interdiction d'entrée ou le départ obligatoire des personnes impliquées dans la perpétration de crimes liés à la traite des personnes, au trafic de migrants et à des délits connexes.

Article VI. Échange de données statistiques

Les Parties s'engagent à échanger, sous une forme standardisée et sur une base annuelle, des informations sur les dossiers enregistrés auprès des organismes chargés des poursuites, de la conduite des opérations, de la prévention, de l'assistance et de la protection des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et des délits connexes, afin d'avoir accès à des informations compatibles entre les Parties.

Article VII. Mécanismes de sécurité

Les Parties veillent à appliquer des mécanismes de sécurité adéquats destinés au contrôle des autorisations de voyage pour les mineurs, des documents d'identité et des documents de voyage, afin qu'ils ne soient pas susceptibles d'être contrefaits ou falsifiés.

Article VIII. Coordination et application

Les entités responsables de la coordination et de la mise en œuvre des actions décrites dans le cadre du présent Accord sont les suivantes :

- Pour la République du Pérou, les membres du Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite des personnes (GTMPTP).

- Pour l'État plurinational de Bolivie, les membres du Conseil plurinational contre la traite et le trafic de personnes.

- Après l'entrée en vigueur du présent Accord bilatéral et dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les Parties élaboreront un plan de travail afin de planifier les activités nécessaires à sa mise en œuvre, qui sera coordonné par les secrétariats techniques du Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite des personnes (GTMPTP) du Pérou et du Conseil plurinational contre la traite et le trafic de personnes de Bolivie.

Article IX. Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé à l'amiable par la voie diplomatique, au moyen de négociations ou de consultations directes entre les Parties.

Article X. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la notification finale par laquelle les Parties s'informent, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet en vertu de leur système juridique national.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, et sera automatiquement renouvelé pour des périodes consécutives d'égale durée.

Article XI. Modifications

Le présent Accord peut être modifié par la signature des amendements convenus par les Parties.

Article XII. Dénonciation

L'Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties au moyen d'une notification par la voie diplomatique indiquant sa volonté de le dénoncer. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification à l'autre Partie.

La dénonciation du présent Accord n'a aucun effet sur la mise en œuvre des programmes ou des projets convenus par les Parties, sauf convention contraire entre les Parties.

SIGNÉ à Puno, au Pérou, le 23 juin 2015, en double exemplaire en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République du Pérou :
ANA MARÍA SÁNCHEZ VARGAS DE RÍOS
Ministre des affaires étrangères

Pour l'État plurinational de Bolivie :
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES
Ministre des affaires étrangères